

LAS ORGANIZACIONES NO-GUBERNAMENTALES EN LA CRISIS CENTROAMERICANA: EL CASO DE LOS SINDICATOS

Dick Parker

DICK PARKER
Sociólogo. Universidad Central de Venezuela.

INTRODUCCION

La discusión sobre 'el proceso de paz en Centroamérica' naturalmente privilegia las consideraciones militares y políticas, a la vez que resalta la actividad diplomática que gira en torno a Esquipulas. Al mismo tiempo, estamos todos conscientes de que cualquier búsqueda de paz que no contemple profundas modificaciones en el cuadro de miseria e injusticia social que caracteriza a la región, tiene perspectivas limitadas. Eso lo plantean los mismos documentos de Esquipulas. Lo reconoce hasta el mismo Informe Kissinger.

También sabemos que estos problemas de fondo se soslayan en las negociaciones de paz precisamente porque no son susceptibles de solución en ese escenario. Sin embargo, las perspectivas de una paz duradera dependen, entre otras cosas, de como se resuelvan los enfrentamientos entre los distintos sectores fundamentales de la sociedad. Es más, son muchos los que plantean que cualquier solución estable pasa por el robustecimiento de la sociedad civil.

Esto nos lleva a preguntar por el papel de las organizaciones no-gubernamentales. Además, como, a nuestro entender, la actual crisis regional es, en gran parte, producto del ritmo acelerado con que se ha impuesto la lógica del capital a partir de la Segunda Guerra Mundial, nos interesa examinar, en particular, el papel de los sindicatos, por ser la organización de la 'sociedad civil' orgánicamente vinculada a la dinámica de la relación capital-trabajo.

Desde hace muchos años se viene planteando la necesidad de una consolidación de las organizaciones sindicales en la región como requisito para el robustecimiento de la sociedad civil¹. Sin embargo, en Centroamérica las últimas décadas se han caracterizado por una marcada debilidad de estas organizaciones. Es más, a partir de los años 70, y de manera más acentuada en los años 80, la crisis del sistema económico mundial y las características de su reestructuración, han llevado a una pérdida de responsabilidad de los sindicatos en gran parte del sistema capitalista y una situación generalmente reconocida como de crisis².

Esto nos lleva a plantear un análisis del impacto de la crisis centroamericana en el quehacer de los sindicatos y de las organizaciones populares en general. Abordaremos, el análisis general en base a la experiencia de Costa Rica, Honduras, Guatemala y El Salvador entre 1979 y 1986 (excluyendo el caso nicaragüense por razones de espacio y por sus características particulares). Posteriormente, analizaremos algunas de las tendencias más resaltantes de las últimas dos años como base para plantear interrogantes sobre sus posibles repercusiones en la actual búsqueda de paz en la región.

LAS ORGANIZACIONES SINDICALES Y POPULARES FRENTE A LA ACTUAL CRISIS REGIONAL

Al abordar la crisis actual que afecta a la región centroamericana, tendríamos que hablar más bien de dos crisis, o por lo menos dos dimensiones de una misma crisis. Por una parte está la crisis política y militar que tiene sus manifestaciones más agudas en Nicaragua y El Salvador, en donde las consideraciones militares han pasado a dominar hasta la escena económica social. También está el caso hondureño, en donde la decisión político-militar de transformar al país en base de operaciones

para los norteamericanos parecía, en un primer momento, a ofrecer la perspectiva de aliviar problemas económicos y sociales. Por otra parte, está una crisis económica con profundas repercusiones sociales y potenciales peligros políticos, que afecta inclusive a aquellos países que, hasta el momento, no se han visto involucrados directamente en los problemas político-militares que han surgido a partir de 1979. Esta crisis económica, que abarca no solamente a los países centroamericanos, sino también al resto de América Latina y a otros países del Tercer Mundo, está signada por una caída secular de los precios de la exportación de los productos colocados en los mercados mundiales y, con el paralelo aumento de las tasas de interés, por la transformación de la deuda externa en un problema cada día más agobiante.

Evidentemente, en el caso de Centroamérica se entrecruzan las dos crisis, haciendo que se manifiesten como dimensiones distintas de una crisis global cuya profundidad ha transformado a la región en uno de los puntos de mayor sensibilidad entre los Estados Unidos y América Latina. Para nuestros propósitos analíticos, preferimos abordar separadamente las dos dimensiones de la crisis porque, en lo que atañe a la acción organizada de la clase obrera tiene implicaciones que no siempre apuntan en la misma dirección. Si por una parte, la beligerancia de las organizaciones sindicales en la segunda mitad de los años 70 coincidió con un contexto económico en que todavía prevalecían los indicios de una expansión económica (que, como es sabido, en general favorece las iniciativas reivindicativas de los obreros), no debe sorprendernos si el profundo estancamiento económico de la primera mitad de los años 80, pusiera a la defensiva a estas mismas organizaciones. Sin embargo, la paralela crisis político-militar, y sobre todo la acentuación de la actuación represiva de los organismos de estado, también abrió perspectivas de una radicalización de las posiciones de las organizaciones representativas de las clases populares. Frente a la evidente incapacidad de los regímenes vigentes de ofrecer soluciones mínimas a los problemas planteados, aumenta la tentación de desbordar el marco reivindicativo convencional y plantear un cuestionamiento del sistema en su conjunto. Inclusive cuando no sea éste el propósito, y cuando se intente seriamente limitar los reclamos a lo que tradicionalmente se aceptaba como legítimo, si la respuesta oficialista responde a una lógica distinta (y militar), los espacios tradicionales de los dirigentes gremiales se encuentra tan restringidos que puede plantearles como alternativas: o un entreguismo totalmente inaceptable; o una actividad gremial que, de hecho, sea catalogada de "subversiva".

De todas maneras, los problemas que se presentan varían de país en país según las características particulares de la situación de cada uno de ellos. Sin embargo, conviene empezar nuestra discusión con una indicación de las dimensiones económicas de la crisis y las consecuencias sociales y que trae, elementos que afectan a toda la región. Con este propósito, señalaremos a continuación la situación en aquellos tres países menos afectados por el impacto de una insurgencia militar interna: Costa Rica, Honduras y, en menor medida, Guatemala.

Empezamos con el caso costarricense porque por razones ya expuestas, es el país de la región menos afectado por la dimensión militar de la crisis. Además, como vimos también, era considerado un país de desarrollo político y económico ejemplar: hasta tal punto que fue conocido como la "Suiza" de la región. No solamente carece de mayores gastos militares, sino además, durante las tres décadas anteriores a los 80, acusaba tasas de crecimiento entre las más altas de América Latina a la vez que lograra estimular un "Estado benefactor" que se reflejaba en una apreciable y apreciado mejoramiento de las condiciones de vida de las grandes mayorías de la población. Ya en el acápite anterior sugerimos cómo durante los años 70, venían agotándose las circunstancias particulares que habían posibilitado evitar una descomposición acelerada del campesinado y cómo venía perfilándose una crisis en el campo. Ahora, toca registrar las dimensiones de la crisis que se abre en la década de los 80. Según un informe de CEPAS,

"para julio de 1982, el índice del salario promedio real había disminuído en un 34% en relación con el de 1977, y un 43% en relación con el del año 1980. En sólo dos años la capacidad adquisitiva del salario promedio de los trabajadores se había reducido en la mitad".³

Aquí no nos toca detallar las dimensiones de la crisis económica; pero, por lo menos dejamos constancia de cómo el mismo informe la registraba: "a partir de 1979 el PIB comenzó a decrecer (3%, 1.7% en 1980, -4,6% en 1981 y -5,9% en 1982) y sólo dio visos de una leve recuperación en 1983 (1,0%), cuando el efecto de la ayuda externa comenzó a sentirse".⁴ Por su-

puesto, tal "ayuda externa" provenía fundamentalmente de los Estados Unidos y tenía su precio político que involucraba al país cada vez más en el torbellino político de la crisis regional.⁵

Si pasamos a revisar la situación en Guatemala, otro país de la región con un crecimiento económico pujante en las décadas anteriores y también relativamente aislado de la crisis político-militar desatada en 1979, veremos que, según un informe de la CEPAL de 1986,

"La economía guatemalteca continuó sometida, durante 1985, a las fuertes tensiones que la afectan desde principios del presente decenio... la mayoría de los indicadores señalan que la economía guatemalteca experimentó en 1985 los efectos más adversos de la prolongada crisis estructural que padece y ha dejado al país con un ingreso medio equivalente al de 12 años atrás".⁶

Como reflejo de esta situación el Informe de la CEPAL registra, entre otras cosas, las cifras del crecimiento del producto interno por habitante que muestra 5 años sucesivos con tasas negativas a partir de 1981.⁷ En el caso de Guatemala, la agudización de la lucha de clases y el resurgimiento de la guerrilla, aunque no reflejo directo de la crisis política desatada en 1979, sin embargo, cuando se combina con el evidente agotamiento de las circunstancias que anteriormente habían favorecido la implantación del capital extranjero en condiciones francamente expoliativas, lleva a una huida de capital que agudiza la crisis.

En Honduras, como ya vimos, el panorama político es más plácido. Sin embargo, según declaración del Frente Unitario de Trabajadores de Honduras (FUTH):

"Cuando el actual gobierno [del Dr. Suazo Córdoba] tomó posesión en enero de 1982, la crisis económica ya era bastante profunda: tenía al país al borde de la paralización... La crisis económica existente en el país en aquella época tuvo su punto de agudización en 1979, ya que en este año, la tasa de crecimiento económico que en el año anterior había sido de 7,4% (Bruto no per cápita), bajó a 6,8%. La economía siguió en descenso y la tasa de crecimiento cayó en 1980 a 2,8%; el siguiente



En Centroamérica existe una crisis económica con repercusiones sociales y políticas que afectan incluso a países que no están involucrados directamente en los problemas político-militares.

te año, 1981, sigue la tendencia descendiente y la tasa de crecimiento cae a 0,5%... en 1982, el primer año del actual gobierno, el índice de crecimiento baja aún más, a -1,6%. El ingreso per cápita ya... es inferior al de 1977".⁸

Como ya dijimos, no intentamos registrar las dimensiones de la crisis económica en Nicaragua y El Salvador porque, más allá de los mismos factores que inciden en los países vecinos estos dos países se encuentran agobiados por una situación de guerra que, como se puede imaginar, agrava bastante los problemas económicos impuestos por las tendencias meramente seculares del mercado capitalista internacional.⁹

Costa Rica

Hemos visto ya cómo el estancamiento de la economía costarricense a partir de 1980 se reflejó en una caída de los salarios reales mucho más que proporcional. A pesar de los intentos iniciales del gobierno de Monge (elegido en 1982) de contrarrestar esta tendencia, el enorme peso de la deuda externa acumulada y la consiguiente necesidad de apoyo financiero externo, llevó a la administración a someterse finalmente a los dictados del Fondo Monetario Internacional, consolidando así la tendencia de buscar solucionar la crisis económica a expensas de los sectores asalariados. Según el Informe de CEPAS,

*"El período de agudización de la crisis ha visto un incremento de la movilización popular en todos los sectores: campesino, sindical y comunal".*¹⁰

Particularmente notables han sido la proliferación de ocupaciones de tierra por los llamados "precaristas" en el campo y los intentos de resolver el agudo problema de la vivienda en los centros urbanos a través de "tomas" de terreno. Sin embargo, en lo sindical, el balance hasta el momento ha sido más bien negativo. Se ha aumentado el nivel de movilización pero sin lograr nuclear una coherente estrategia sindical. En parte estos se debe a la acentuada fragmentación del movimiento sindical que para el año 1984 abarcaba 6 confederaciones.¹¹ Precisamente en ese año, la de mayor importancia, la Confederación Unitaria de Trabajadores, (con 17,6% de los sindicatos pero 81% de los afiliados) se dividió a consecuencia de la división producida en el Partido Vanguardia Popular que la dominaba. A mediados de 1984 se produjo la más importante ofensiva sindical de los últimos años cuando una huelga que paralizó a las plantaciones bananeras de Limón, fue seguido por una parálisis del magisterio.¹² La derrota de la huelga bananera (la más larga en la historia costarricense) llevó al colapso del sindicato que hasta ese momento había sido el más poderoso del país.¹³ Esta experiencia, si la consideramos junto con el ya comentado debilitamiento de la presencia sindical en la industria y, en general su reducida implantación en el sector privado de la economía, ayuda a explicar que Donato y Rojas llegaran a la conclusión de que "para buena parte de los asalariados, sobre todo lo que podríamos denominar 'clase obrera' propiamente dicha, la actividad sindical es marginal".¹⁴ Es más, dicen que "daba la tendencia al deterioro y debilitamiento progresivo de las organizaciones sindicales, en gran parte debido a la ofensiva antisindical decretada por empresarios y gobiernos, es posible que en los próximos años el sindicalismo en Costa Rica tenga una existencia solamente 'nominal', salvo que [la] tendencia llegue a invertirse".¹⁵

En definitiva, el sindicalismo costarricense ha salido debilitado de la crisis. Hasta tal punto es así que las pugnas entre las distintas fuerzas sindicales inspiradas en las organizaciones continentales que veníamos discutiendo, han pasado a un segundo plano y lo que empieza a perfilarse es una nueva modalidad de sindicalismo patronal basada en la ideología, del "solidarismo".¹⁶ Según un artículo de Gustavo Blanco, publicado recientemente,

"El solidarismo pretende resolver tres asuntos de interés empresarial:

- a) *la estabilidad de la empresa, entendida como el mantenimiento de una paz laboral;*
- b) *la reducción de las demandas laborales...*
- c) *a nivel político, cierra espacios a la opción sindical, impidiendo su ingreso, neutralizando su existencia o erradicando la organización sindical".*¹⁷

En 1985 se aprobó en Costa Rica una Ley Solidarista cuyo objetivo era facilitar la proliferación de tales organizaciones.

Según Donato y Rojas, "el gran número de asociaciones de este tipo que se han creado, inclusive en unidades de trabajo donde tradicionalmente existía la organización sindical, no parece augurar buenos tiempos para el sindicalismo".¹⁸

El solidarismo, un auténtico producto costarricense, se concibe, sin embargo, como un aporte potencial a la crisis regional. En septiembre de 1985 se fundó un organismo solidarista regional denominado Consejo Superior Solidarista de las Américas y en mayo de 1986 en un seminario sobre "solidarismo en Centroamérica" se anunció como objetivos:

1. *Dar a conocer y compartir la experiencia solidarista entre representantes empresariales y la comunidad centroamericana.*
2. *Suministrar información que permita conocer la posibilidad de implementar el solidarismo en los países del área, ofreciéndolo como un pacto social conducente a la democratización y el mancomunado esfuerzo desarrollista obrero-patronal de Centroamérica.*
3. *Motivar y comprometer a los participantes en el proceso de desarrollo del Solidarismo en sus respectivos países.*
4. *Diseñar una estrategia que permita alcanzar el éxito en la adopción del Movimiento Solidarista en los países de Centroamérica".*¹⁹

Como podremos apreciar más adelante, por lo menos en Guatemala, el empresario ha acogido con beneplácito las recomendaciones de sus homólogos costarricenses.

Honduras

Honduras es el otro país de la región que hasta el momento ha logrado evitar los problemas provocados por una insurgencia interna. Como vimos, a pesar de los sucesivos regímenes militares, tiene una tradición de organización sindical de mayor consistencia que la de Costa Rica y de sus vecinos. Vimos cómo las organizaciones sindicales y campesinas se habían consolidado en los años 70, logrando inusitados niveles de pugnacidad en 1977 y 1979. Vimos también cómo la crisis económica empezó a sentirse a partir de 1980. Pero para abordar el tema de la actuación sindical frente a la crisis, hace falta tomar en cuenta otro elemento: la elección en 1982 de un régimen civil bajo la presidencia del Dr. Suazo Córdoba. Así Honduras fue el primero de aquellos países de la región dominados tradicionalmente por los militares en responder a las presiones norteamericanas en pos de la instalación de regímenes civiles. Sin embargo, y paradójicamente, la transición al régimen civil, lejos de abrirle nuevos espacios para la actividad sindical, significó un endurecimiento de la represión y la consolidación de una política de represión terrorista en contra de los dirigentes sindicales. En efecto, la transición al régimen civil fue acompañado por la imposición dentro de las fuerzas armadas de una política de "seguridad nacional" directamente inspirada por los militares argentinos y encabezada por quien pasara a ser Comandante en Jefe, el General Gustavo Álvarez Martínez.

Según posterior testimonio de un documento del III Congreso de la FUTH (1985):

"En Honduras [la política de seguridad nacional] agudizó con la prepotencia y el fanatismo del entonces Coronel Gustavo Álvarez Martínez desde 1981. En este año se hacen desaparecer 52 personas, mientras 68 estuvieron temporalmente en esta condición; 49 fueron hechos prisioneros y torturados y hubieron 41 asesinatos políticos según las cifras dadas por el Comité Hondureño para la Defensa de los Derechos Humanos.

*Sin embargo, es con el gobierno del Dr. Suazo Córdoba que la política de 'seguridad nacional' se oficializa y se consolida con la alianza Suazo-Alvarez, avalada por la CIA yanqui. En este gobierno [la represión ha alcanzado niveles nunca vistos en nuestro medio, los derechos humanos han sido violados en todas formas y han aumentado las cifras de encarcelados, asesinados y secuestrados por razones políticas; actualmente se reclaman alrededor de 130 desaparecidos..."*²⁰

En ausencia de una amenaza política-militar de carácter insurreccional, esta represión se dirige sobre todo en contra de los dirigentes de organizaciones populares, sindicales y campesinas.



En Honduras, después de la caída del general Álvarez Martínez, en 1984, se registra un resurgimiento de las organizaciones populares.

Con la caída del General Álvarez Martínez, el 31 de marzo de 1984, y el posterior proceso electoral que llevara a Azcona Hoyo a la Presidencia en enero de 1986, disminuyeron los niveles de represión. En consecuencia, se registra una reactivación de las organizaciones populares, destacándose los intentos de unificación promovidos por las centrales de las tres corrientes ideológicas que siguen dominando el movimiento obrero del país. En 1984 el Comité coordinador de Organizaciones Populares (CCOP) aglutinó alrededor de la FUTH una serie de organizaciones cuya dirigencia se identificaba con la izquierda. El año siguiente, se formó el Comité Nacional Obrero Campesino de Honduras (CONOCH) que incorporaba la CTH y la CGT. Evidencia de la relativa debilidad de las organizaciones sindicales se encuentra en el hecho de que estos avances hacia una mayor unidad se produjeron, no en base a acciones comunes sino más bien en función de presentar planteamientos programáticos a las autoridades. En este sentido se destaca el documento del CONACH del 14 de febrero de 1986 en que los sindicatos presentan al recién instalado gobierno de Azcona, un planteamiento detallado de las medidas de política nacional que esperan de su gestión.²¹ Un documento igualmente abarcante, aunque más radical, había surgido del III Congreso de la FUTH, celebrado poco antes.²² Donde los esfuerzos organizativos se basaban más en programas de acción que en lo declarativo fue en el sector campesino. En este caso, las reivindicaciones no son mayoritariamente salariales sino en torno a la "recuperación de tierras".²³ La virtual paralización del proceso de redistribución de tierras a partir de 1977, naturalmente sirvió para agravar el ya crónico problema del acceso a la tierra para los campesinos desposeídos. En tal sentido reviste particularmente interés una declaración de la CGT de 1985 en donde anuncia su respaldo a la política de acciones directas que impulsaba la UNC.

"Como un acto de fe y solidaridad en las luchas de los oprimidos la Central General de Trabajadores (C.G.T.), ante la crisis agraria que abate a nuestro país, trayendo como consecuencia, la falta de trabajo, falta de alimentos seguido de la desnutrición, y falta de bienestar social en las familias campesinas, quienes después de esperar por más de ocho años para que sus solicitudes sean resueltas favorablemente, se han visto obligadas a entrar en un operativo de recuperación de tierras denominado "Mártires de las Pinuelas" se manifiesta de la siguiente manera:

CONSIDERANDO: Que son justas las aspiraciones de la Unión Nacional de Campesinos (U.N.C.), en que sus afiliados cuenten con una parcela de tierra para producir lo necesario y satisfacer las necesidades familiares.

CONSIDERANDO: Que el Instituto Nacional Agrario (INA), ha actuado con ineptitud, rezagando la totalidad de solicitudes de tierra, situación que ha impulsado a nuestros hermanos campesinos a actuar con justicia y necesidad.

CONSIDERANDO: Que agotada la paciencia de espera y presionados por el hambre que agobia a nuestros campesinos,

después de agotados los trámites legales, no queda otro camino que utilizar el recurso de la lucha organizada por buscarle solución a los múltiples problemas agrarios.

Por tanto:

- 1.- La Central General de Trabajadores (C.G.T.), se solidariza con la lucha emprendida por la Unión Nacional de Campesinos (U.N.C.) en la recuperación de la tierra que como derecho de justicia le corresponden.*
- 2.- Dar su apoyo material y espiritualmente a los hermanos campesinos que en este momento se encuentran realizando el operativo "Mártires de las Pinuelas", como acción justa y necesaria.*
- 3.- Llamar la atención de las autoridades militares para que comprendan que el momento crucial de los campesinos, es producto de la incapacidad política y administrativa de las dependencias del Estado, y que no se presten a reprimir a nuestros hermanos campesinos.*
- 4.- Exigir al Instituto Nacional Agrario (INA), para que inmediatamente solucione los diferentes conflictos agrarios presentados en todo el territorio nacional.*
- 5.- Llamar a todas las organizaciones afiliadas y fraternas para que brinden su aporte solidario a la Unión Nacional de Campesinos, en todas las regiones del país, y estar alertas a cualquier llamado de nuestra Central." ²⁴*

Paralelamente, se impulsaba la organización de la Central Nacional de Trabajadores del Campo que celebró un primer Congreso en enero de 1985. También la ANACH, la misma UNC y Federación de Cooperativas de la Reforma Agraria de Honduras (FEDORAH) se integran una organización nacional denominada Solidaridad Campesina Unificada radicalmente enfrentada al Instituto de Reforma Agraria. ²⁵

Por lo visto, parecería que en el caso de Honduras, la crisis ha llevado a serias limitaciones a la capacidad de acción de los sindicatos urbanos pero ha acentuado su ya característica politización, fortaleciendo inclusive posturas más radicales. Donde se evidencia mayor capacidad de acción frente al régimen vigente es en el campo y en función de una política de acción directa para la recuperación de tierras.

Guatemala

En Guatemala, como en Honduras, los últimos años de los 70 fueron un período de marcado auge en la organización y las luchas populares. Sin embargo, en Guatemala la reactivación del movimiento obrero y popular fue motivo de mayor preocupación entre los sectores dominantes por varias razones: primero, porque se produjo dentro de un contexto ya marcado por altos niveles de represión; segundo porque sucedió en un momento en que la lucha armada insurreccional, derrotada en los años 60, se había resucitado y parecía nutrirse del creciente descontento campesino e indígena; y tercero, porque empezaban a evidenciarse grietas en el bloque dominante en la medida en que se agotaran las perspectivas de prolongar las condiciones de expansión económica. ²⁶

En estas circunstancias, la represión se intensificó mucho antes que en Honduras y asumió formas mucho más feroces. Después de todo, las fuerzas armadas guatemaltecas ya habían hecho escuela como guardianes de la "seguridad nacional" y no necesitaban buscar consejeros en el Cono Sur. Hemos mencionado ya la masacre de Panzós en 1977 y la incineración de los campesinos que habían ocupado la Embajada de España en 1980. Estos serían dos hitos en una campaña represiva en las áreas rurales en que la lucha antiguerrillera llegaba a asumir rasgos verdaderamente etnocidas en contra de la población mayormente indígena de las áreas rurales. ²⁷ Sin embargo, el aspecto más novedoso de la campaña represiva fue la utilización del terrorismo oficial con el propósito de descabezar las organizaciones sindicales en los centros urbanos, sobre todo en la ciudad de Guatemala. Huelga abundar en detalles porque recibieron amplia divulgación en la prensa internacional. Basta recordar la "desaparición" y asesinato de dirigentes del CNUS, de la FTG y de la FASGUA para apreciar la amplitud de criterio

ideológico de esta ofensiva terrorista. El momento más álgido de esta represión fue a mediados del año 1980. Después de la marcha en celebración del primero de mayo, fueron secuestrados numerosos participantes estimándose en 30 los muertos. En junio, se irrumpió en una reunión de dirigentes sindicales de la CNT, secuestrando y posteriormente asesinando a los 27 participantes. Y en agosto, secuestraron a 17 sindicalistas más, pertenecientes a diversas organizaciones.²⁸ Así, el régimen de Lucas García descabezó el movimiento obrero urbano precisamente en el momento en que los cuatro ejércitos guerrilleros logran un proceso de unificación y amenazaban con insertar su estrategia ofensiva en un ambiente de auge de las organizaciones populares.²⁹

Con la desarticulación del movimiento sindical urbano, las fuerzas armadas pudieron concentrar sus esfuerzos en la lucha contra la guerrilla y en reprimir las comunidades rurales. Cuando el General Ríos Montt asumió el gobierno a consecuencia de un golpe de estado en 1982, se prometió una apertura. En los centros urbanos la represión, en efecto, disminuyó, por lo menos haciéndose más selectiva. Pero la ofensiva gubernamental en el campo se profundizó en base a la aplicación de tácticas de contrainsurgencia perfeccionadas anteriormente en Vietnam.³⁰ Las dimensiones de la derrota del movimiento popular naturalmente imponía reflexiones al respecto. Sobre todo, para aquellos comprometidos con objetivos revolucionarios, se planteaban interrogantes sobre el problema de la relación entre la lucha armada y la lucha de masas. En ese sentido, necesariamente se ha preguntado por qué, después del marcado auge del movimiento de masas entre 1974 y 1980, se hubiera experimentado un reflujo tan acentuado, hasta tal punto que todavía en 1985 se caracterizara por "la ausencia pública de las masas, por la desarticulación de sus organizaciones, por la carencia de cuadros directivos que han sido diezmados por la represión y por el cierre de los espacios que permitieron en el pasado la organización y extensión del movimiento".³¹

Uno de los intentos de responder a la interrogante plantea lo siguiente:

"Ayer, cuando el movimiento obrero condujo al movimiento de masas urbano en su conjunto y logró tomar las calles, no comprendimos que una correcta orientación a los cuadros directivos de las diversas organizaciones que componían el CNUS era indispensable, que los cuadros no eran eternos y que era imprescindible darle a la clase obrera los elementos teóricos y prácticos que le permitieran continuar avanzando. Los dirigentes nos perdimos en nuestras propias posiciones, las diferencias a nivel de la unidad revolucionaria incidieron escandalosamente en el conjunto del movimiento de masas, y la disputa por el control de ésta determinó la implementación de diversas tácticas que chocaban con las características propias del movimiento amplio; la hegemonía se trató de alcanzar sobre la base de posiciones de fuerza y no a partir de una política de principios, el sectarismo carcomió a los cuadros medios y de base, llevando a la ruptura de la unidad en las diferentes organizaciones amplias y principalmente en el CNUS, en los momentos en que era vital que esa unidad fuese fortalecida y consolidada".³²

Concluye con la triste conclusión de que "desde 1954, la experiencia ha sido que el auge del movimiento de masas no ha coincidido con el desarrollo de las organizaciones revolucionarias en armas".³³ Evidentemente, estos comentarios no resuelven el problema planteado y tal vez por eso el comentarista culmina reclamando "la elaboración y aplicación de una estrategia y tácticas correctas y comunes" sin especificar cuales pudieran ser.

Como hemos podido apreciar, el reflujo del movimiento sindical y popular fue profundo y prolongado. Pero no podía perdurar para siempre: por una parte, porque la política genocida en el campo y en particular en contra de las comunidades indígenas provocaba desplazamientos masivos de refugiados que pasaron a ser un problema internacional en la medida en que cruzaban la frontera buscando refugio en el vecino México; pero por otra parte, y sobre todo, porque la administración Reagan, como elemento central de su política de aislar a la Nicaragua sandinista y tildarla de amenaza totalitaria frente a la Democracia Occidental, buscaba la institucionalización de regímenes civiles en aquellos países de la región tradicionalmente dirigidos por los militares. Hemos visto como se inició este proceso en Honduras en 1982. Más adelante, veremos cómo, en El Salvador, llevaría a la elección de Napoleón Duarte como presidente en 1984. En Guatemala, el proceso era más largo y dificultoso pero finalmente culminaría en la elección de Vinicio Cerezo como Presidente a comienzos de 1986.

En el curso del proceso que llevaría finalmente a la entrega de la Presidencia a un Demócrata Cristiano, empezaban a

abrirse otra vez espacios en que tuvieran expresión organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos incluidos. Sin embargo, no se trataba de una oportunidad para resucitar aquellas organizaciones que anteriormente habrían encabezado el auge de los años 70. Las fuerzas armadas planificaron el proceso de transición precisamente con el objetivo de evitar una repetición de esa experiencia. De allí que la primera concesión, ofrecida por la administración de Ríos Montt, fue la integración del sindicalismo confiable al Consejo de Estado a través de la persona de Juan Francisco Alfaro Mijangos, quien posteriormente fundó la Confederación de Unidad Sindical de Guatemala (CUSG) inspirado ideológicamente por la ORIT. Posteriormente se permitió la organización de la Coordinadora General de Trabajadores de Guatemala (CGTG) afiliada a la CLAT que de esa manera, logró reinsertarse en la escena sindical nacional después de la ruptura con su afiliado en 1978. Huelga decir que la nueva Central cristiana promovida por la CLAT, adoptaría una política más cuidadosa que su antecesor y, estaría identificada con la suerte de la Democracia Cristiana, una vez que Vinicio Cerezo accediera a la Presidencia en 1986. El Partido Socialista Democrático (PDS) tiene cierta influencia en sindicatos existentes a través de su Instituto de Estudios y Promoción Social (IDEPSO) aunque no aspira a aglutinar una organización propia. Por último, los intentos de resucitar un sindicalismo autónomo, se expresa a través de la Unidad Sindical de Trabajadores de Guatemala (UNSITRAGUA) y, en cierta medida, en la Federación de Sindicatos Bancarios y de Seguros (FESEBS).

En estas circunstancias, es evidente que la organización sindical sigue siendo débil y sigue enfrentando serios obstáculos que van desde las diferentes formas de represión patronal (incluidos los despidos masivos y el recurso al asesinato) hasta las

La organización sindical guatemalteca es débil y enfrenta obstáculos, como la represión patronal y las tácticas dilatorias practicadas por las autoridades de trabajo para legalizar los sindicatos.



tácticas dilatorias que practican las autoridades del trabajo en la legalización de los sindicatos.³⁴ Con toda razón, plantea con mayor cuidado que hace una década la búsqueda de nuevos espacios. En 1985 se llegó a celebrar el 1º de mayo por primera vez desde 1980 y en septiembre del mismo año se recurrió otra vez a manifestaciones para impedir el aumento del precio del transporte. 1986 ha sido testigo de renovadas luchas, distinguiéndose por su alto grado de organización y de lucha los trabajadores públicos, quienes durante el curso del año han fundado una Confederación en base a 14 sindicatos que, según afirman, aglutina unos 50.000 trabajadores. Tal como en el caso de Costa Rica, en la actualidad pareciera que las perspectivas para sentar la organización sindical son mejores en el sector público que en el privado. Seguramente por eso, el actual régimen ya ha introducido legislación prohibiéndole a los empleados públicos la participación en huelgas de solidaridad. Para el sector privado, hay indicios de que se proponen promover la fórmula solidarista según el modelo desarrollado en Costa Rica.³⁵

Aunque sería aventurado pronosticar las perspectivas para el movimiento popular en el país, resulta necesario indicar que se trata de la recomposición de un movimiento que quedó duramente golpeado a partir del año 1980. En palabras de un sindicalista guatemalteco, Miguel Angel Albizures: "Se trata de una recomposición en dos sentidos: una, la que realizan las or-

organizaciones sindicales más golpeadas que tratan de recuperar espacios para una acción independiente, y la otra, que se refleja en el resurgimiento activo y en la predominancia de tendencias ideológicas conciliatorias entre el capital y el trabajo. Es una recomposición estimulada desde arriba porque se quiere convertir el movimiento sindical en un apéndice de la política del Estado..."³⁶ Es una perspectiva difícil de implementar a largo plazo. Sin embargo, no debemos subestimar los obstáculos que se enfrentan en el intento de reconstruir un movimiento obrero clasista.

El Salvador

En El Salvador como en Guatemala el destino del movimiento obrero organizado se encuentra profundamente afectado por la situación insurreccional, que en este caso se transformó en una guerra civil que todavía no ha podido resolverse en el terreno militar. En El Salvador el ritmo de auge-represión-reflujo y recuperación de la capacidad organizativa y de lucha sindical parece en grado notable al que ya hemos analizado en el caso guatemalteco. Según un estudio del Centro de Investigación y Acción Social (CINAS) se puede distinguir tres períodos a partir de 1979. Desde comienzos de 1979 hasta agosto de 1980, se da un primer período "cuya característica principal fue un elevado accionar político de las masas, destacada participación del sector obrero..., con un decidido apoyo de las organizaciones populares". El segundo período, de agosto 1980 a septiembre de 1983, se caracteriza por una represión despiadada por parte del Estado con el asesinato de un estimado de 5000 dirigentes sindicales acompañada por una consiguiente desarticulación de las organizaciones. Para CINAS, un tercer período, de recuperación, se inicia con la huelga de los trabajadores del Instituto de Vivienda Urbana en septiembre de 1983.³⁷ Tal como en el caso guatemalteco, es recién en 1985 cuando se vuelve a celebrar el 1º de mayo. La experiencia de los dos países es tan parecida que sentimos justificado en ahorrar un análisis detallado del proceso en este caso. Preferimos dedicar nuestra atención a algunos aspectos que diferencian sus respectivas experiencias. Analizaremos, sucesivamente: la incidencia de la política de la guerrilla; la ingerencia de la política norteamericana -sobre todo a través del IADSL; y la trayectoria de los sindicatos demócrata-cristianos.

Hacemos referencia a la política de la guerrilla porque en el caso de El Salvador se presenta en forma más clara que en Guatemala el desfase entre el auge de las organizaciones populares y la ofensiva militar insurreccional. En 1985, los mismos dirigentes del Frente de Liberación Nacional Farabundo Martí, reconocieron que desde 1980 hasta esa fecha su política se había caracterizado por una "desviación militarista" con el correspondiente desconocimiento de la importancia de la "lucha de masas". En efecto, hacia finales de 1980, con el régimen salvadoreño manifestando evidentes indicios de descomposición, y frente al inminente acceso de Reagan a la Presidencia de los Estados Unidos, la guerrilla lanzó una ofensiva militar que buscaba emular la hazaña de los sandinistas. A pesar de la formidable capacidad militar que evidenciaron en ese momento y en los años siguientes, no pudieron derrocar al régimen, que en términos militares llegó a contar con un apoyo norteamericano suficiente como para evitar una derrota aunque incapaz de crear condiciones para imponerse a la guerrilla. En estas circunstancias se hizo evidente que la lucha política pasaba a tener prioridad y que con un movimiento popular y sindical arrinconado y reprimido las perspectivas políticas eran limitadas. Inclusive, se llegó a admitir que la "desviación militarista" había contribuido a dificultar la lucha de masas, sobre todo en los centros urbanos. Con esto, se llegó a plantear como interrogante, tal como en Guatemala, cuál sería la estrategia "correcta". A estas alturas, no nos encontramos en condición de evaluar los resultados de la nueva estrategia adoptada aunque indudablemente ha contribuido a una recuperación de las luchas populares, (sobre todo en los centros urbanos) mucho más notable que en el caso guatemalteco.³⁸

Para entender el papel de IADSL y de los sindicatos demócrata-cristianos durante el curso de la crisis es necesario tomar en cuenta: en primer término, el papel del PDC y de Duarte en el gobierno a partir del mismo año 1980, y segundo, el afán, tanto del gobierno norteamericano como de los mismos democristianos, de construir y consolidar una base social a expensas de la izquierda y como contrapeso frente a la extrema derecha. IADSL fue invitado a volver al país recién en 1979, en vísperas de la guerra civil y cuando, a comienzos de 1980, se concreta la alianza del PDC con los militares bajo la Presidencia de Duarte, una de las primeras medidas del gobierno fue decretar una reforma agraria. A cambio del apoyo de la UCS (promovido originalmente por IADSL en los años 60), su secretario General, Rodolfo Viera, aceptó la Presidencia del Instituto Salvadoreño de

Transformación Agraria (ISTA), organismo encargado de implantar la reforma. A partir del verano de 1980, mientras que los sindicatos de izquierda fueron sometidos a la política represiva que mencionamos arriba, empezó a funcionar la Unidad Popular Democrática (UPD), una coalición obrera, financiada inicialmente por la CLAT y posteriormente por el IADSL, que llegó a aglutinar la misma UCS, FETRACONSTANS (en general obreros de la construcción), la Central de Trabajadores Salvadoreños (CTS) y dos pequeños desprendimientos de la UCS, la agrupación cooperativa ACOPA y la Asociación Campesina Indígena ANIS. De estas 5 organizaciones, UCS y FESINCONSTANS tenían vínculos antiguos con el IADSL que, además, pasó a financiar un 80% de los gastos de ACOPA y ANIS. Solamente CTS, afiliada a la CLAT, carecía de una subvención financiera por parte de IADSL.³⁹

La UPD aportó apoyo organizacional al PDC en las elecciones de 1982 a la Asamblea Constituyente y, en 1984, para la campaña presidencial de Duarte. También apoyaron al PDC en las elecciones parlamentarias de 1985. Sin embargo, sus relaciones con el IADSL y con el mismo Duarte se hacían cada vez más tensas. Después de desilusionarse con el empeño del gobierno a partir de 1982, la UPD condicionó su apoyo a Duarte en 1984 a un compromiso de 14 puntos, conocidos como el "Pacto Social" que incluía reivindicaciones propiamente gremiales con la exigencia de la apertura de un proceso de diálogo con el FMLN-FDR con el propósito de buscar una solución política a la guerra civil. Después de la victoria de Duarte la UPD rápidamente se desilusionó y el 30 de agosto hizo público su distanciamiento del régimen. Esta apertura provocó, a su vez, una crisis en las relaciones con el IADSL cuando este último, aprovechando su poderío financiero intentó romper la resistencia de los elementos desafectos, con la creación de una organización alternativa y promoviendo divisiones entre los distintos sindicatos miembros de la organización. El apoyo al PDC en la elección de 1985 era tibio, según un dirigente se trataba del "menor de dos males". Cuando, el 2 de junio, el gobierno ordenó a las fuerzas de seguridad asaltar el Hospital de Seguridad Social, ocupado desde hace 27 días por obreros de la salud en huelga, los dirigentes de la UPD se indignaron. Según Miguel Ángel Vásquez, Secretario General de la CTS: "estas son las mismas tácticas aplicadas por gobiernos anteriores". A pesar del reemplazo del responsable del IADSL y un intento de contrarrestar el daño, Vásquez retiró su organización de la UPD, declarando que "el gobierno ha perdido la confianza del pueblo". La UPD fue un trampolín para que el gobierno llegara al poder. Una vez instalado, se han olvidado de los obreros y campesinos que los apoyaron. Ahora estamos viendo el secuestro de dirigentes sindicales y los escuadrones de muerte están amenazando y secuestrando a estudiantes por manifestar demandas legítimas".⁴⁰

El proceso de descomposición de las bases populares del gobierno de Duarte que acabamos de resumir, llevó a una confluencia con fuerzas sindicales identificadas con la izquierda, fenómeno que poco antes había sido impensable. A comienzos de 1986 se forma la Unidad Nacional de los Trabajadores Salvadoreños (UNTS) a iniciativa de la UPD, COACES y AGEHMA y la CTS, plegándose otras organizaciones, como el Comité 1º de Mayo, identificadas plenamente con la izquierda. Las organizaciones incorporadas a la UNTS plantean al gobierno exigencias comunes resumidas en 11 puntos.⁴¹ Interesa registrar la explicación ofrecida por Vásquez de esta confluencia. Declaró que:

"En 1980, la CST ingresa en la Unión Popular Democrática. Tenemos una afinidad ideológica con la Democracia Cristiana, pero no nos vamos a identificar con ningún gobierno. Cuando en 1982 el ingeniero Duarte nos presentó los 14 puntos de su "pacto social", nosotros no dudamos en firmarlo. El avance de la reforma agraria, la democratización y el respeto a los derechos humanos, así como los esfuerzos para iniciar el diálogo con la guerrilla, nos parecían unos objetivos dignos de apoyo.

A través de la UPD se manejaban fondos para la campaña electoral de la DC y se proponían cargos para el gobierno. A mí me ofrecieron el de viceministro de Trabajo, pero no lo acepté. Durante aquella época tuvimos que luchar contra el control que el Instituto Americano para el Desarrollo del Sindicalismo Libre quería ejercer sobre nosotros. Cuando el gobierno dejó de cumplir sus compromisos, empezó a acusarnos de apoyar al FMLN cada vez que le presionábamos. Entonces decidimos abandonar el apoyo al Pacto Social".⁴²

Poco después, hablando ante los manifestantes reunidos para celebrar el 1º de mayo hizo una declaración que expresa en forma dramática el cambio que se había producido: "Hace dos años, hablé en esta misma Plaza de la Libertad con el ingeniero Duarte en apoyo del pacto social. Entonces le dije que si no cumplía sus compromisos le denunciaría, y ahora acudo de



La capacidad de acción de los sindicatos y de las organizaciones populares centroamericanas se ha recuperado.

nuevo a la plaza para denunciar al gobierno del PDC".⁴³ Por supuesto, entre el gobierno y el IADSL se fundó rápidamente, ya para marzo de 1986, una organización oficialista, la Unidad Nacional Obrero Campesina (UNOC). Sin embargo, difícilmente se puede disfrazar el desgaste de las bases sindicales del régimen y el fortalecimiento de un sindicalismo autónomo enfrentado al gobierno.

Como podemos apreciar, en los países que hemos revisado hasta el momento, todos registran un debilitamiento de las organizaciones sindicales y populares comparado con los años de auge hacia fines de los años 70. Sin embargo, con la excepción de Costa Rica, se ha podido constatar un proceso de recuperación durante los últimos años, más acentuado en El Salvador que en Guatemala y Honduras.

CONSIDERACIONES FINALES

De las tendencias observadas en la anterior discusión, queremos terminar por comentar brevemente algunas que últimamente han asumido mayor relieve:

1) Indudablemente, ha seguido evidenciándose una recuperación de la capacidad de acción de los sindicatos y de las organizaciones populares en general desde los años culminantes de auge del terrorismo oficial entre los años 80 y 83. Después del derrocamiento del General Alvarez en Honduras y la consolidación del gobierno de Cerezo en Guatemala, en éstos dos países se han consolidado un mayor espacio para la protesta y la movilización. Sin embargo, el marco dentro del cual se plantea la lucha sigue siendo condicionado por el peso de la presencia de instituciones armadas que, a pesar de su actual perfil más bajo, mantiene su potencialidad represiva. Esto se evidenció en Guatemala con el golpe blando del 11 de mayo del año pasado que mermó notablemente la capacidad de maniobra de la administración Cerezo⁴⁴. También en el vecino Honduras, estamos presenciando una renovada presencia de la represión militar frente a las movilizaciones campesinas⁴⁵.

2) El mayor espacio político que ha posibilitado una recuperación de cierta protesta, no significa una mejora fundamental en la capacidad negociadora de los sindicatos. Es más, estamos en presencia de un evidente debilitamiento de organizaciones sindicales con una larga tradición organizacional y de lucha. En las plantaciones bananeras, por ejemplo, la histórica derrota de la huelga de 1984 en Costa Rica ha sido seguido por el más reciente debilitamiento de los sindicatos vinculados al en-

clave bananero en Honduras ⁴⁶. Además, el capital privado, tradicionalmente renuente de aceptar la sindicalización, ha seguido la ofensiva que tuvimos oportunidad de analizar en el caso de Costa Rica con la legalización del solidarismo, y en el curso de los últimos dos años se ha consolidado la misma táctica en Guatemala y Honduras ⁴⁷.

3) Esta debilidad frente al sector privado, ha llevado a un énfasis cada vez mayor hacia la búsqueda de mecanismos para incidir en las decisiones de las distintas administraciones. Por una parte, se ha fortalecido la organización sindical entre los empleados públicos que están mostrando una mayor combatividad, y por la otra, las protestas se dirigen más a oponerse a medidas gubernamentales que afectan el conjunto de los asalariados (aumentos de combustible, aumentos de precios de la cesta básica, etc. -como la huelga de agosto del año pasado en Guatemala). Sin embargo, la misma crisis ha estrechado la capacidad de las actuales administraciones de hacer concesiones y las protestas asumen características básicamente defensivas.

4) Sigue sin perspectivas de solución el grave problema de acceso a la tierra, mientras en Honduras se han reactivado las 'recuperaciones' sin indicios de una disponibilidad del gobierno de volver a la política de reformas introducidas en los años 70; y en Guatemala se viene reactivando el movimiento campesino en circunstancia en que el planteamiento de reforma sigue enfrentado por el veto de la casta militar. En Costa Rica, como apreciamos anteriormente, el problema campesino ha asumido una dimensión nunca antes planteado.

5) Tomando en cuenta lo anterior, queremos terminar planteando que, por mucho que se haya logrado avanzar, a través de Esquipulas, en la resolución de algunos de los aspectos militares y políticos de la actual crisis centroamericana, las perspectivas para resolver los problemas sociales de trasfondo siguen siendo problemáticas.

NOTAS

- 1 Como ejemplo tomaremos la postura del Partido Democrático Revolucionario Hondureño en 1949, cuando argumentó que: "Sólo con el pueblo sindicalizado podría un gobierno democrático emprender, sin peligro de ser derribado por los intereses creados extranjeros y nacionales, las reformas democráticas que necesitamos urgentemente para salvar a la Nación de la bancarrota completa. La reforma agraria, la organización del crédito barato para los agricultores, comerciantes, artesanos e industriales; la reforma educativa fiscal, la revisión de las concesiones leoninas otorgadas a los monopolios extranjeros que están asfixiando el pueblo hondureño se podrían realizar únicamente con el pueblo sindicalizado y orientado democráticamente". Desde otra perspectiva ideológica, se encuentran los supuestos que nutren la labor desarrollada por la ORIT y posteriormente por el Instituto Interamericano para el Desarrollo del Sindicalismo Libre (IADSL) que se jacta de haber formado 90.000 dirigentes sindicales en Centroamérica entre 1962 y 1982 [Ver T. Barry (et.al): **Dollars and Dictators. A Guide to Central America**, London, Zed Press, 1982; p. 103].
- 2 De la mucha literatura al respecto, mencionaremos el reciente seminario celebrado por la CLAT sobre "La Crisis del Movimiento Sindical en América Latina y las Respuestas-Propuestas Alternativas", UTAL, Venezuela, 27/11 al 03/12/1988.
- 3 CEPAS, "Los efectos sociales de la crisis", **ALAI**, Año 9, II Epoca, N° 68, Montreal, marzo 1985, p. 19.
- 4 *Ibid.*, p. 22.
- 5 Para un análisis detallado al respecto: Manuel Gutiérrez S. & Jorge Vargas C., **Costa Rica es el Nombre del Juego. Análisis de la Crisis de 1984**, San José, Instituto Costarricense de Estudios Sociales, 1986.
- 6 CEPAL, "Evolución de la Economía Guatemalteca", **ALAI**, Año X, II Epoca, N° 83, Quito, Septiembre 1986, p. 6.
- 7 Son sucesivamente -2.0% (1981), -6,2% (1982), -5,4% (1983), -2,2% (1984) y -4,0% (1985). *Ibid.*, p. 8.

- 8 Federación Unitaria de Trabajadores de Honduras (FUTH): "La Realidad Nacional (Documento del III Congreso)", **ALAI**, Año 9, II Epoca, N° 72, Montreal, julio 1985, pp 5-6.
- 9 Para detalles sobre El Salvador: "El Salvador: Crisis en una economía de guerra", **Pensamiento Propio**, Año 2, N° 19, Managua, dic. 1984, pp. 33-37.
- 10 CEPAS, **Op. Cit.**, p. 21.
- 11 Eliza M. Donato y Manuel Rojas R., "Problemas y Perspectivas del Sindicalismo Costarricense", **ALAI**, Año 9, II Epoca, N° 71, Montreal, Junio, 1985; p. 23.
- 12 "Movimientos populares cuestionan status socioeconómico", **Inforpress Centroamericana**, N° 600, Guatemala, 19 de julio de 1984, pp. 6-7.
- 13 "Agotamiento y colapso de la huelga más larga", **Inforpress Centroamericana**, N° 612, Guatemala, 11 de octubre de 1984, pp. 3-4.
- 14 Donato y Rojas, **Op. Cit.** pp. 23-4.
- 15 **Ibid.** p. 24.
- 16 Para un análisis exhaustivo del desarrollo y de la doctrina del solidarismo en Costa Rica ver: Gustavo Blanco & Oriando Navarro, **El Solidarismo. Pensamiento y Dinámica de un Movimiento Obrero Patronal**, San José: Editorial Costa Rica, 1984.
- 17 Gustavo Blanco B., "Ofensiva 'Solidarista' en Centroamérica", **ALAI**, Año XI, II Epoca, N° 92, Quito, junio 1987, p. 19.
- 18 Donato y Rojas, **Op. Cit.**, p. 24.
- 19 Gustavo Blanco, **Op. Cit.**, p. 20.
- 20 FUTH, **Op. Cit.**, p. 5.
- 21 El documento se encuentra reproducido en **Boletín Informativo Honduras**, N° 58, Tegucigalpa-CEDOH, febrero 1986, pp.8-10.
- 22 FUTH, **Op. Cit.**
- 23 Marcial Caballero, dirigente de la UNC insiste en la importancia que atribuyen a la concepción de "recuperación" para designar lo que en otros países se llaman "tomas". Ver entrevista reproducida en **Boletín Informativo Honduras**, N°47, Tegucigalpa-CEDOH, marzo 1985, p. 4.
- 24 "Declaración de la CGT", **ALAI**, Año 9, II Epoca, N° 71, Montreal, junio 1985, p. 16.
- 25 "Solidaridad Campesina Unificada (AFU)", **ALAI**, Año X, II Epoca, N° 83, Quito, septiembre 1986, pp. 9-10, 17.
- 26 Ver: George Black, **Triumph of the People. The Sandinist Revolution**, London, Zed Press, 1981.
- 27 CERIGUA, "Guatemala: Ejecución de la Guerra de Baja Intensidad", **ALAI**, Año XI, II Epoca, N° 91, Quito, mayo 1987, pp. 4-7.
- 28 "¿Resurgirá el Movimiento Sindical?", **Noticias de Guatemala**, Año 6, N° 96, Guatemala, 15 septiembre de 1983, p. 6.
- 30 CERIGUA, **Op. cit.**, pp. 4-7;
- 31 "Guatemala: Unidad de acción imprescindible", **ALAI**, Año 9, II Epoca, N° 69-70, Montreal, abril-mayo 1985, p. 17.
- 32 **Ibid.**
- 33 **Ibid.**
- 34 "Guatemala: Los obreros se organizan" **ALAI**, Año X, II Epoca, N° 84, Quito, octubre 1986, p. 8.
- 35 **Ibid.**, p. 9. Ver también: Blanco, **Op. Cit.**, p. 20.
- 36 "Guatemala: El sindicalismo clasista entre dos fuegos" **ALAI**, Año X, II Epoca, N° 83, Quito, Sept. 1986, p. 4
- 37 Ricardo Gómez, "El Salvador: Dinámica del movimiento de masas", **Boletín Semanal Centroamericano**, Epoca V, Año IV, N° 207-8, El Salvador, 4/17-11-1985, p. 9.

- 38 "El Salvador: Sube la marea laboral", **ALAI**, Año 10, II Epoca, Nº 80, Montreal, marzo 1986, pp. 8-10.
- 39 Chris Norton, **Op. Cit.**, pp. 27-28.
- 40 **Ibid**, p. 31-36.
- 41 "El Salvador: sube la marea laboral", **ALAI**, Año 10, II Epoca, Nº 80, Montreal 1986, pp. 8-10.
- 42 Camino Lagos, "Accionar Unificado", **ALAI**, Año X, II Epoca, Nº 84, Quito, octubre 1986, pp. 12-13.
- 43 **Ibid.**, p. 12.
- 44 Ver el análisis en CERI-GUA, Vol. II, Servicio Especial, junio, julio, 1988.
- 45 Para Honduras se puede consultar las respectivas publicaciones del Centro de Documentación de Honduras (CEDOH) y del Instituto de Investigaciones Socio-económicas de Honduras (INSEH).
- 46 Ver INSEH, Informe Nº 37; p. 7.
- 47 **Ibid.**, p. 6.